

(Firmalos).—*Ignacio R. Ibarrola.*—*Luis G. Chavez.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte  
de Justicia.*

México, Junio doce de mil ochocientos setenta y uno.

Vistas las diligencias practicadas últimamente por el Juzgado de Distrito de Zacatecas, en el juicio sobre amparo promovido por el C. Canuto A. Tostado, relativas á la insolvencia de éste para satisfacer la multa de cien pesos que se le impuso: el auto promovido por el mismo Juzgado en 23 de Mayo próximo pasado, en que se exime á Tostado de la multa, en virtud de haber justificado su insolvencia; y considerando: que aunque no está en las facultades del Juzgado la exención de la multa, por haber sido confirmada su imposición por esta Corte Suprema, no debe imponerse en caso de insolvencia, según lo dispuesto en el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869. Se decreta: que se exime á Tostado por su insolvencia, del pago de la multa á que fué condenado en 28 de Marzo de este año.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Zacatecas, con testimonio de este auto para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arceaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Junio

diez y seis de mil ochocientos setenta y uno.  
—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de  
Distrito de Durango, por el C. Manuel Celis, contra el Ayuntamiento de Canatlan que le ha prohibido fabricar en un terreno de su propiedad.*

### PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal ha examinado el expediente instruido, con motivo del recurso de amparo que ha intentado el C. Manuel Celis contra una providencia de Canatlan, que le mandó suspender la obra que está fabricando en un solar, de que se dice dueño legítimo el quejoso. En el informe que rindió aquella corporación, expone: que habiendo Manuel Celis comenzado á fabricar una casa en una calle pública, le mandó suspender la obra, de conformidad con lo prevenido en la ley 3ª, título 32, partida 3ª. A ser ciertos estos hechos, sin duda que el Ayuntamiento procedió legalmente; pero las constancias de autos prueban lo contrario. En efecto, el quejoso ha presentado una escritura pública, fojas 1ª haber adquirido por compra la propiedad del solar en que está fabricando su casa. Ese documento fué otorgado en Canatlan, en Julio del año pasado, con la circunstancia muy remarcable de que el vendedor antes de formalizar el contrato, ocurrió al Ayuntamiento solicitando su permiso para vender, por haberlo considerado necesario, y aquella corporación, por acuerdo de 21 de Junio del mismo año, no solo consintió en que se verificara la venta, sino que expresamente reconoció el derecho de propiedad del vendedor en el mencionado solar, si es que el comprador lo adquirió del legítimo

dueño. En este mismo solar está construyendo Celis la obra que se le ha mandado suspender, con flagrante violación de los art. 16 y 27 de la Constitución. Por lo expuesto el Fiscal concluye pidiendo al Juzgado se sirva otorgar á Manuel Celis el amparo que ha solicitado.

Durango, Mayo doce de mil ochocientos setenta y uno.—*Vicente Castro*.—Una rúbrica.

### *Sentencia del Juez de Distrito.*

Durango, Mayo veinticuatro de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por el C. Manuel Celis, contra una providencia del Ayuntamiento de Canatlan por la que se le ha prohibido seguir fabricando en un terreno de su propiedad. Considerando: que de autos consta que el C. Gabrél Chavez era el anterior dueño del terreno en cuestión: que en consecuencia, pudo hacer de él los usos que mas conviniere á su derecho de dominio, pudiendo transferir ese dominio á cualquiera otra persona: Que fundado en la plenitud de esos mismos derechos, vendió el terreno de que se trata al C. Manuel Celis á 1º de Julio del año próximo pasado: Que para hacer esa venta Chavez á Celis, se presentó antes al Ayuntamiento de Canatlan solicitando el permiso para verificarla: Que con este motivo el referido Ayuntamiento, no solo consintió en que se verificara la venta, sino que reconoció á Chavez por legítimo dueño del terreno y con el imprescriptible derecho de hacer de él los usos que mas le convinieran: Que en consecuencia, Manuel Celis por medio del contrato de compra venta que ha verificado, se ha subrogado en todos los derechos de Chavez: Que uno de esos derechos es la facultad de edificar; pues de otra manera quedaria limitado el ejercicio del dominio pleno por

no poder hacer uno de los usos que mas lo caracterizan: Que el Ayuntamiento de Canatlan no presenta prueba alguna que acredite tener derecho para impedir la fábrica en el terreno de que se trata: Que aun suponiendo que tuviera facultad para impedirlo, debia de entablar el interdicto prohibitorio ante una autoridad jurisdiccional competente, y no ejercerlo por sí y ante sí, supuesto que es parte interesada en este negocio. Visto todo lo expuesto, lo demás alegado, lo pedido por el ministerio fiscal, la citación para sentencia corriente á fojas 16 vuelta, y cuanto mas ver convino, el C. Juez de Distrito del Estado declara:

Primero: que la providencia del Ayuntamiento de Canatlan, fecha 21 de Febrero del presente año, por la que se ha prohibido fabricar á Manuel Celis en un terreno de su propiedad, es atentatoria, porque importa la violación de las garantías otorgadas por la Constitución federal en sus art. 16 y 27.

Segundo: que en consecuencia, la justicia de la Nación ampara y protege á Manuel Celis contra esa providencia. Publíquese esta sentencia en el periódico oficial, y remítanse estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revisión.

Y por este auto definitivamente juzgando, así lo proveyó y firmó el mismo C. Juez por ante mí de que certifico.—*Gerónimo Sida*.—*Juan B. Arellano*, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Junio veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Durango, por el C. Manuel Celis, contra una providencia del Ayuntamiento de Canatlan, en virtud de la cual se le prohibió continuar fabri-

cando en un terreno de su propiedad. Vistas las constancias de autos y considerando: que aunque el Ayuntamiento de Canatlán, ha tenido á salvo sus derechos para hacerlo valer en la vía y forma prescritos por las leyes, no solo por la ocupacion de la propiedad particular por causa de utilidad pública, sino tambien para obligar al quejoso á que se sujete á las ordenanzas municipales: que en el presente caso la Orden de suspension decretada que ha motivado el presente juicio, importa una violacion de las garantías que otorgan los art. 16 y 27 de la Constitucion federal de la República. Con tales fundamentos se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Durango, en los términos siguientes: "La justicia de la Union ampara y protege al C. Manuel Celis, contra la providencia del Ayuntamiento de Canatlán que le prohibió continuar edificando en un terreno de su propiedad."

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos, los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Únidos mexicanos y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Junio veinticuatro de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustin Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por el C. Manuel Dondé contra el Tesorero General del Estado que le cobra derechos de exportacion en virtud de un Decreto de la Legislatura del Estado.*

PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez de Distrito:

Solicita el C. Manuel Dondé que por vía de proteccion y amparo haga vd. que el Tesorero general de este Estado le restituya la cantidad de cincuenta y cinco pesos cincuenta y tres centavos que le cobró y pagó indebidamente por el derecho que expresan los documentos adjuntos á su ocurno; pues que siendo de exportacion sobre efectos del país aunque con el título de "patente de jiro," y habiéndose establecido por la Legislatura local en Marzo último, sin previo consentimiento del Congreso de la Union, resulta que se ha violado el art. 112 del Pacto fundamental de la República, y por consiguiente que la autoridad del Estado ha invadido la esfera de la federal. Mas estas razones que podian ser legales para justificar la procedencia del amparo si con fundamento de ellas se hubiese intentado al tiempo de existir el cobro que se dice anti-constitucional, á nada conducen en el presente juicio en que se hacen valer despues de haberse verificado el pago que no por fuerza, sino de grado hizo el quejoso como lo declaró espontáneamente ante ese mismo juzgado, cuando interpelado por el infrascripto Fiscal sobre la causa que lo impelia á resistir el pago de la contribucion federal correspondiente á la misma del Estado que ahora reclama, contestó que habia querido *regalarla á éste*. Cualquiera, sin embargo, que haya sido la manera en que la satisfizo, tratándose no de un hecho de actualidad ó presente que es al que debe referirse todo amparo, sino de un hecho pasado que no se